

## Reflexión

- ¿Se vulneran garantías básicas del debido proceso al iniciarse una acción judicial común, cuando las decisiones de la jurisdicción indígena en La Cocha fueron emitidas anteriormente?

## Información del video:

El video *Viviendo la Justicia* es resultado de una **investigación antropológica jurídica** realizada entre mayo y diciembre del 2009, para recuperar los sistemas de derecho indígena y afroecuatoriano, desde la visión de sus propios actores.

El estudio se desarrolló en **tres provincias**: Esmeraldas, en la región Costa, con las comunidades de Santa Rosa (nacionalidad Eperara), Zapallo Grande (nacionalidad Chachi) y Malimpia (pueblo Afroecuatoriano); Chimborazo, en la región Sierra, con las comunidades de Totoras y Linllin (pueblo Puruha, nacionalidad Kichwa), y Sucumbíos, en la región Amazónica, con las comunidades San Pablo (nacionalidad Secoya), Dureno (nacionalidad Cofán) y Puyupungu (nacionalidad Kichwa).

La estrategia metodológica fue la **investigación colaborativa**, es decir, se contó con la participación activa de ocho investigadores e investigadoras indígenas y afroecuatorianos, coordinados por un investigador no indígena. Los investigadores contaron con el conocimiento y auspicio de sus respectivas organizaciones locales y regionales, y se obligaron a la devolución y difusión de los resultados.

Luego de compartir con todos los participantes, en un taller realizado en mayo del 2009, el objetivo, contenido y metodología de la investigación, se acordó un sistema común de registro y ordenamiento de la información y se eligió una comunidad específica de cada una de las siete nacionalidades indígenas y pueblo afroecuatoriano, para ser investigada en profundidad.

Durante cuatro meses se recolectó información etnográfica en **cuatro temas orientadores**: estudios de caso de las comunidades elegidas, funcionamiento de cada sistema de derecho, relación de los mismos con la justicia ordinaria y mecanismos de fortalecimiento de la justicia indígena y afroecuatoriana.

En el quinto mes se socializó la información en cada una de las comunidades seleccionadas para validarla y completarla; luego se procedió a la elaboración de los resultados finales, los cuales intentan convertirse en insumos significativos para la elaboración, discusión y aprobación de la ley de coordinación y cooperación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena, prevista en el artículo No. 171 de la Constitución de la República del Ecuador.

Uno de los resultados finales es el presente video que describe y brinda elementos de análisis desde una perspectiva antropológica jurídica sobre tres casos de administración de justicia en distintos ámbitos:

El caso La Cocha I – Nacionalidad Kichwa de la provincia Cotopaxi

El caso de dos shamanes acusados en Dashino – Nacionalidad Kichwa en la provincia de Sucumbíos

El caso Siriano Cajilema – Nacionalidad Puruhai de la provincia Chimborazo El video fue realizado, durante el año 2009-2010, por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; el Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural, y la Oficina del Asesor en Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas.



Tramos del video "Viviendo la Justicia"

### Descripción y evolución del caso

A través de un recorte de prensa perteneciente al diario *El Comercio*, de fecha viernes 10 de mayo del 2002, sección D4, se informa sobre este caso con el título: *La Cocha quiere aumentar el castigo en caso de muerte*, con un relato de los hechos y una entrevista al señor César Umajinga, titulada *"No hay confianza en la Ley"*.

La investigación fiscal da cuenta de que el día martes, 23 de abril del 2002, a las 16:45, el señor Teniente Político de Zumbahua, Julio César Hidalgo, realiza la identificación, levantamiento y autopsia de quien en vida se llamó Maly Latacunga Cuchiparte, fallecido por un traumatismo craneoencefálico grave.

Debido a un conflicto dentro de la comunidad Kichwa de La Cocha donde intervienen: Juan Manuel Cuchiparte Umajinga, Nicolás Cuchiparte Umajinga y Jaime Cuchiparte Guamangate con el occiso señor Maly Latacunga Cuchiparte. Posteriormente, los inicialmente agredidos regresan al lugar y armados agreden a Latacunga, dejándolo inconsciente, quien posteriormente fallece.

Los brigadistas de la comunidad La Cocha proceden a la localización y **detención del ciudadano** Nicolás Cuchiparte Umajinga. Después de ocho días se presentaron voluntariamente los otros dos, quedando a órdenes de la comunidad.

Trece comunidades de la parroquia Zumbahua se convocan para analizar el conflicto y se resuelve con los siguientes puntos:

- Que los detenidos no sean puestos a órdenes de las autoridades del sistema de justicia ordinario.
- Que sean juzgados de acuerdo a las leyes y costumbres de las comunidades.
- Indemnizar a la viuda.

El día 5 de mayo del 2002 convocan a una reunión a las comunidades para suscribir una acta en el cabildo La Cocha, donde se acuerda fijar como indemnización la cantidad de seis mil dólares americanos, entregando tres mil dólares a la suscripción del acta y el otro cincuenta por ciento en cuotas de sesenta dólares mensuales. Informa que se castiga de conformidad a las costumbres y tradiciones de sus antepasados, para lo cual han hecho caminar a los agresores en piedras, se los ha ortigado y luego se los ha dejado en libertad. Además proceden a desterrarlos de las comunidades por el lapso de dos años. Dice que el Movimiento Indígena de Cotopaxi ha hecho conocer de esta situación a través del canal de televisión de Ecuavisa.

Con fecha 10 de septiembre del 2002, el señor Juez Segundo de lo Penal de Cotopaxi encargado del Tercero, dicta auto de nulidad de todo lo actuado por el Fiscal Titular, al amparo de lo que disponía el texto del artículo 191 inciso cuarto de la Constitución Política del Ecuador, donde se reconocía la jurisdicción indígena.

Entre otros términos que utilizó este Juez, con fecha 13 de Septiembre de 2002, tenemos los siguientes párrafos:

*"[...] una amarga sensación de inseguridad jurídica... penoso y escabroso, cuando las costumbres ancestrales vibran haciendo presente un pasado ambiguo y tenebroso superado a medias por la claridad de una cultura civilizada... ¿A ellos, quién los ordena Magistrados? ¿La tradición, la comuna, la vejez, la historia escrita en pedazos mudos renuentes a la memoria? ¿No valen las universidades, el caudal sapiente de un mando que a paso acelerado marcha al conocimiento ilustre de quienes superaron las cavernas, la tribu, el tótem, el tambor, la lanza, el mazo, la pira y el holocausto de las viudas?... ¿Hay del pueblo que se remite a lo empírico y se parta de la luz de la ciencia" ...delirios empíricos... es obradamente contranatura permitir la vigencia de tribunales o juzgados empíricos proclives al quebrantamiento de la Ley".*

Una de las Salas de la Corte de Justicia de Latacunga, aceptando el recurso de Apelación nula lo actuado por el juez encargado y dispone que debe convocar a

juicio el juez titular de esa dependencia, ante lo cual se emite el respectivo auto de llamamiento a la etapa de juicio y ratifica la prisión preventiva de todos los acusados.

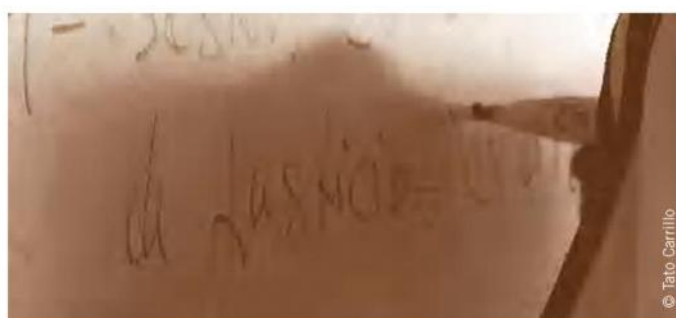
El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Latacunga violando el principio de independencia interna, se dirige al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, utilizando, entre otros, los siguientes términos:

*“Nosotros, como hombres de derecho, tenemos que aplicar la ley tal como está concebida. No podemos [...] darle una interpretación extensiva y antojadiza [...] a pesar de constar como simple enunciado en la Constitución Política de la República del Ecuador, la justicia indígena no está en vigencia hasta este momento [...]. El avance y las grandes transformaciones de la humanidad han sido obra de espíritus selectos, de mentes brillantes y no de oportunistas, protagonistas y vanidosos [...]. Los pueblos de la tierra desde los albores de la humanidad han venido luchando para que los principios y las normas de convivencia entre los hombres se vayan perfeccionando, abandonando, poco a poco, aquellas prácticas salvajes de hacer justicia, hasta llegar a través de mucho esfuerzo y no pocas vicisitudes, a la justicia que hoy por hoy aplica todo el pueblo civilizado [...] retornando, de esta forma al primitivismo que creíamos superado”.*

Desde esa época hasta la actualidad la tramitación del juicio se ha suspendido hasta que sean aprehendidos los acusados y sean presentados ante el Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi, para que se verifique la audiencia de juicio. Esta próxima la prescripción de esta acción penal.

#### Análisis del caso:

Dinámica del conflicto	Rol de Función Judicial
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Momento 1: luego de producirse los hechos, las comunidades indígenas asumen su responsabilidad de actuar, buscando sancionar a los responsables del delito y reparar el daño causado a la víctima.</li> <li>• Momento 2: las resoluciones de las comunidades indígenas no se cumplen en su totalidad, porque los representantes de la justicia ordinaria no valoran los procedimientos de la justicia indígena.</li> <li>• Momento 3: Los máximos representantes provinciales de la justicia ordinaria defienden lo que creen es un caso de su competencia, transformando en una lucha de poder lo que debió ser una oportunidad histórica para analizar las relaciones y aportes que pueden darse entre el sistema de justicia ordinaria y los sistemas de justicia indígena.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En el momento en que se produce este caso, se evidencia un vacío legal, pues no existe un procedimiento que dirima las acciones del sistema de justicia ordinaria en relación con las decisiones que pueda tomar el sistema de justicia indígena.</li> <li>• Los representantes de la función judicial pudieron aprovechar la oportunidad para plantear el debate sobre la necesidad de una interpretación intercultural en el sistema de justicia</li> </ul>



Tomás del video "Viviendo la Justicia"



## Caso 2: Derechos territoriales ancestrales

Pueblo Kichwa Tzawata en la Amazonía

El Estado ecuatoriano en la década de los años 60 del siglo XX, en el marco de la reforma agraria y la ampliación de la frontera agrícola adjudicó a una congregación religiosa más de 600 hectáreas de territorios ubicados en el Cantón Carlos Julio Arrosema Tola en la provincia de Napo; ésta a su vez vendió estas tierras a una familia, con el respectivo título de propiedad inscrito en el registro correspondiente; finalmente esta familia vendió la tierra a una compañía minera, que tenía interés de explotar la zona y que inició un proceso de desalojo en contra del pueblo Tzawata. Todos estos procesos desconocieron la existencia y presencia del pueblo indígena Tzawata en estos territorios.

### Preguntas de reflexión:

- ¿En este caso cuales son los derechos violados?
- ¿Cuáles son las consecuencias de las violaciones de estos derechos para los titulares de derechos?
- ¿Es este un caso de competencia de la Defensoría del Pueblo? Si así lo considera motive y justifique las razones constitucionales y legales que lo amparan.
- Si este caso es de competencia de la Defensoría del Pueblo, ¿qué acciones defensoriales desarrollaría y cuál o cuáles de las atribuciones constitucionales y legales promovería?



© Fundación Pachamama / Joke Baert

Normativa que protege los derechos	Violaciones a los derechos	¿Qué hacer frente a la violación de los derechos?	Procedimiento bajo derecho ¿Cómo se debió actuar?
<ul style="list-style-type: none"> <li>Arts. 57.4 y 5 de la Constitución: "4... Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas de pago de tasas e impuestos." "5... Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita"</li> </ul>	<p>Violación y afectación a los siguientes derechos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Propiedad imprescriptible de sus tierras;</li> <li>Poseción de sus tierras y territorios ancestrales;</li> <li>Adjudicación gratuita de sus tierras;</li> <li>Participación en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales que se hallen en sus tierras;</li> <li>La consulta previa, libre e informada dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente;</li> <li>Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural;</li> <li>No ser desplazados de sus tierras ancestrales;</li> <li>Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador;</li> <li>Limitación de las actividades militares en sus territorios;</li> <li>Igualdad y no discriminación.</li> </ul>	<p>La funcionaria o funcionario de oficio le corresponde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar si los hechos violatorios ocurrieron</li> <li>Determinar si los hechos afectan, amenazan o vulneran derechos constitucionales e internacionales</li> <li>Emidir una providencia defensorial de investigación en la cual se disponga: a) Visita in situ al lugar de los hechos, b) Notificar y requerir un informe fundamentado a las autoridades e instituciones requeridas, c) Solicitar a centros académicos o de investigación y autoridades competentes informes antropológicos e históricos sobre la presencia del pueblo Kichwa Tzawata en dichos territorios, d) Determinar una fecha para recibir en audiencia a quienes pueden informar sobre el caso.</li> <li>Si se verifica la amenaza, afectación o vulneración de derechos, resolver: a) Emitiendo un pronunciamiento defensorial, o b) Emitiendo medidas de cumplimiento obligatorio, o c) Elaborar y presentar una acción de garantía jurisdiccional.</li> <li>Referencia normativa: Constitución, Art. 66.4; Arts. 57. 4.5.6.7.8.11.13.20; Convenio 169 de la OIT.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conocer de oficio o a petición de parte el caso;</li> <li>Emidir una providencia defensorial de investigación,</li> <li>Disponer una visita in situ al lugar de los hechos,</li> <li>Disponer a la autoridad e institución requerida informe sobre los hechos ocurridos.</li> <li>Disponer la realización de una audiencia para escuchar a las partes (en este caso no a los PLAV) así como a terceros interesados.</li> <li>Emidir un pronunciamiento que puede determinar: a.- Resolución Defensorial, o b.- Disponer medidas de cumplimiento obligatorio, o c.- Elaborar o presentar una acción de garantía constitucional. En este caso un reclamo previo por el incumplimiento de las medidas cautelares de la CIDH.</li> <li>Referencia normativa: Constitución, Art. 215. 1. 2 o 3; Ley Orgánica de Defensoría del Pueblo, Art. 2; Art. 12; Art. 16; Art. 17; Art. 19 LODP; Art. 21; Art. 22.</li> </ul>

### Caso 3: Derecho a la tutela judicial efectiva

Comunas de Montañita – Santa Elena

Corporaciones y empresas turísticas amparadas en sentencias de acciones de protección emitidas por los jueces y cortes de justicia de Santa Elena inician un proceso de desalojo de las tierras de las comunas en Montañita para desarrollar sus actividades económicas; las sentencias de la administración de justicia no toman en cuenta la posesión ancestral de estas tierras ribereñas por parte de las comunas, ni las resoluciones administrativas del Ministerio de Agricultura que desde la década de los años 30 adjudica dichos derechos a las comunas.

#### Preguntas de reflexión:

- ¿En este caso cuales son los derechos violados?
- ¿Cuáles son las consecuencias de las violaciones de estos derechos para los titulares de derechos?
- ¿Es este un caso de competencia de la Defensoría del Pueblo? Si así lo considera motive y justifique las razones constitucionales y legales que lo amparan.
- Si este caso es de competencia de la Defensoría del Pueblo, mencione que acciones defensoriales desarrollaría y ¿cuál o cuáles de las atribuciones constitucionales y legales promovería?



Normativa que protege los derechos	Violaciones a los derechos	Restitución ¿Qué hacer frente a la violación de los derechos?	Procedimiento bajo derecho ¿Cómo se debió actuar?
<ul style="list-style-type: none"> <li>Art. 75 Constitución: "Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses con sujeción a los principios de inmediación y celeridad, en ningún caso quedará en la indefensión..."</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indefensión jurídica de las comunidades de Montaña.</li> <li>Falta de tutela judicial efectiva</li> <li>Amenaza a la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias</li> <li>Amenaza a la posesión de sus tierras ancestrales</li> <li>Amenaza de desplazamiento de sus tierras ancestrales</li> </ul>	<p>La funcionaria o funcionario de oficio le corresponde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar si las sentencias de la administración de justicia están ejecutoriadas</li> <li>Determinar si las sentencias afectan, amenazan o vulneran derechos constitucionales e internacionales o fueron resultado de vulneración de garantías básicas del debido proceso</li> <li>Una vez verificado el paso anterior, verificar si a la fecha de presentación del caso ante la Defensoría del Pueblo se encuentra vigente el término para presentar una acción extraordinaria de protección. Si se confirma que estamos dentro del término para presentar la acción extraordinaria de protección, se la debe preparar y presentarla ante la Corte Constitucional (el escrito debe presentarse ante la Corte de Justicia que emitió el último fallo para que ésta a su vez le envíe a la Corte Constitucional)</li> <li>Referencia normativa: Constitución, Art. 75; Art. 76; Art. 82; Art. 57 4.5.11.13; Convenio 169 de la OIT.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conocer la petición de parte</li> <li>Verificar la documentación de respaldo de la petición, especialmente las sentencias de los tribunales de justicia.</li> <li>Estudiar en un máximo de 24 horas si las sentencias vulneran derechos o fueron resultado de afectaciones al debido proceso legal.</li> <li>Verificar si el caso se encuentra dentro del tiempo previsto por la ley para presentar una acción extraordinaria de protección.</li> <li>Preparar en un máximo de 24 horas una propuesta de acción extraordinaria de protección</li> <li>Presentar la acción extraordinaria de protección ante el tribunal que emitió la sentencia, para que este lo envíe a la Corte Constitucional</li> <li>Dar seguimiento al trámite dentro de la Corte Constitucional.</li> <li>Referencia normativa: Constitución, Art. 215. 1.; Art. 2 Ley Orgánica de Defensoría del Pueblo; Art. 94; Arts. 58 al 64 LOGJCC</li> </ul>



#### Caso 4: Derecho a la igualdad y no discriminación

Acceso a un cargo público de una persona afrodescendiente

La señorita Dra. NN, quien se identifica como una mujer afro descendiente, indica que desde hace aproximadamente nueve años viene laborando en la Fiscalía General del Estado, desempeñando actualmente el cargo de secretaria del fiscal .

Manifiesta además que, con fecha 12 de julio del 2010, la Fiscalía General del Estado, convocó al Concurso Abierto de Oposición y Méritos, requiriendo quince profesionales para agentes fiscales para la provincia de Pichincha, para lo cual consignó los requisitos mínimos que debían cumplir los postulantes.

Indica que, tras la referida convocatoria, y al reunir los requisitos establecidos para el cargo, aplicó para el cargo de agente fiscal de la provincia de Pichincha, obteniendo el décimo segundo lugar con una nota de 64, 50 puntos, de conformidad con los resultados publicados en la página web de la Fiscalía General del Estado, el 11 de agosto del 2010.

Según manifiesta, sin razón, “*más que la de su condición de afro ecuatoriana*”, el Tribunal de Méritos y Oposición, no la convocó a la respectiva posesión como corresponde, saltándose su puesto, y llamando sí a posesionarse a quienes quedaron en puestos inferiores que en el orden seguían

##### Preguntas de reflexión:

- ¿En este caso cuales son los derechos violados?
- ¿Cuáles son las consecuencias de las violaciones de estos derechos para los titulares de derechos?
- Es este un caso de competencia de la Defensoría del Pueblo? Si así lo considera motive y justifique las razones constitucionales y legales que lo amparan.
- Si este caso es de competencia de la Defensoría del Pueblo, mencione ¿qué acciones defensoriales desarrollaría y cuál o cuáles de las atribuciones constitucionales y legales promovería?





Normativa que protege los derechos	Violaciones a los derechos	¿Qué hacer frente a la violación de los derechos?	Procedimiento bajo derecho (¿Cómo se debió actuar?)
Constitución, Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 2). Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, (...) ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.	Amenaza de violación de derechos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Igualdad de Trato;</li> <li>• No discriminación;</li> <li>• Trabajo;</li> <li>• Vida Digna;</li> <li>• Debido Proceso;</li> <li>• Seguridad Jurídica.</li> </ul>	La funcionaria o funcionario de oficio le corresponde: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar si los hechos violatorios ocurrieron</li> <li>• Determinar si los hechos afectan, amenazan o vulneran derechos constitucionales e internacionales</li> <li>• Emitir una providencia defensorial de investigación en la cual se disponga: a) Notificar y requerir un informe fundamentado a la autoridad e institución requerida, b) Determinar una fecha para recibir en audiencia a quienes pueden informar sobre el caso.</li> <li>• Si se verifica la amenaza, afectación o vulneración de derechos, resolver: a) Emitiendo un pronunciamiento defensorial, o b) Emitiendo medidas de cumplimiento obligatorio, o c) Elaborar y presentar una acción de garantía jurisdiccional.</li> <li>• Referencia normativa: Constitución, Art. 11.2; Arts. 57.2, 3, de la Constitución; Art. 58; Art. 59; Art. 61.7; Arts. 66.2, 4, 17; Art. 93 CR ; Convenio 169 de la OIT; Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación racial; Observaciones Generales del Comité contra la Discriminación Racial.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conocer de oficio el caso</li> <li>• Emitir una providencia defensorial de investigación.</li> <li>• Disponer una visita in situ al lugar de los hechos.</li> <li>• Disponer a la autoridad e institución requerida informe sobre los hechos ocurridos.</li> <li>• Disponer la realización de una audiencia para escuchar a las partes, así como a terceros interesados.</li> <li>• Acceder a Jurisprudencia y doctrina internacional sobre igualdad y no discriminación.</li> <li>• Emitir un pronunciamiento que puede determinar: a.- Resolución Defensorial, o b.- Disponer medidas de cumplimiento obligatorio, o c.- Elaborar o presentar una acción de garantía constitucional</li> <li>• Referencia normativa: Constitución, Art. 215; Arts. 2, 12, 16, 17, 19, 21; Ley Orgánica de Defensoría del Pueblo; Arts. 22, 25 del RTQ ; Arts. 52 al 57 de la LOGJCC</li> </ul>



© Ministerio del Ambiente del Ecuador / Eduardo Pichilinghe Ramos

Casa de indígenas en aislamiento (probablemente Taromenani), fotografiada en el año 2009. Esta casa se encuentra a menos de 10 kilómetros del asentamiento colonio-campesino más cercano por lo que la vulnerabilidad de sus habitantes es extrema y la potencialidad de conflictos muy alta.

Para poder monitorear los peligros que corren los indígenas en aislamiento y de esa forma poder minimizarlos, el Plan de Medidas Cautelares realizó entre el 2008 e inicios del 2010 varios sobrevuelos con técnicas especializadas para cumplir sus objetivos. Por ejemplo, los sobrevuelos se realizaron a una altura de mas de 1 km, sobre el suelo y con cámaras sumamente potentes, con el fin de minimizar el impacto del ruido sobre los habitantes.

## Estudio de caso: Pueblos indígenas en aislamiento

### Instrucciones

En este ejercicio se buscará que la Defensoría del Pueblo logre que el Estado implemente y respete las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de los pueblos indígenas en aislamiento, Taromenane y Tagaeri. Para ello primero se deberán leer individualmente los hechos relacionados con el caso.

Luego de leer el caso, se organizarán tres grupos de trabajo:

El primer grupo representará a la **delegación de la Defensoría del Pueblo**, que representará los derechos de los pueblos Taromenane y Tagaeri, y deberá argumentar jurídicamente la necesidad de que el Estado ecuatoriano cumpla con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH en favor de estos pueblos. La argumentación se basará en los derechos y normas legales establecidas en la Constitución del Ecuador y los instrumentos internacionales; además en las competencias de la Defensoría del Pueblo, en relación con la protección de los pueblos y nacionalidades indígenas, motivando y justificando las razones constitucionales y legales que amparan su participación. Para esto el grupo también deberá revisar los contenidos del Eje 1.

El segundo grupo representará el **Estado ecuatoriano**. Ellos deberán basar su caso en los convenios firmados con el Estado, la Ley de Minería y la sentencia de la Corte Constitucional sobre la inconstitucionalidad de dicha Ley y deberán presentar pruebas de que los pueblos Taromenane y Tagaeri estarán protegidos pese a la explotación petrolera en el campo Armadillo. Deberán también argumentar sobre la necesidad de la explotación petrolera para el desarrollo del país y para financiar la inversión social del gobierno.

Finalmente, el tercer grupo representará a la **CIDH**. Basados estrictamente en las pruebas de cargo y descargo presentadas por ambas partes deberá emitir el fallo (a este grupo se le deberá entregar copia en blanco de la matriz que presentamos al final de esta unidad).

El fallo deberá compararse con la matriz del caso para ver si se han considerado todos los elementos o faltó algún punto a tomarse en cuenta. Si el fallo difiere mucho de la matriz, se puede proponer un debate para llegar a un consenso sobre la sentencia emitida.

Tiempo recomendado para el ejercicio: 3 horas

- Lectura individual: 20 minutos
- Definición de grupos: 5 minutos
- Preparación de alegatos en los grupos: 45 minutos
- Exposición ante la corte: 40 minutos (20 minutos por grupo)
- Deliberación de la corte: 20 minutos
- Exposición de la sentencia: 20 minutos
- Debate para lograr consensos (de ser necesario) 30 minutos

### Relación de los hechos:

El Ministerio de Recursos No Renovables el 16 de junio del 2011 convocó a licitación petrolera el campo Armadillo, zona donde se encuentran grupos de los pueblos indígenas en aislamiento Taromenane y Tagaeri. Con fecha 10 de mayo del 2006, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), otorgó "*medidas cautelares en los términos de los Artículos 25(1) del Reglamento a favor de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane*" con base en una solicitud interpuesta por los señores Fernando Ponce Villacís, Raúl Moscoso, Juan Guevara, y Patricio Asimbaya, por el asesinato de miembros del pueblo Taromenane, presuntamente por personas dedicadas a la tala ilegal de madera en el sector Yasuní, este hecho tuvo lugar el 26 de abril del 2006. Se encontraron abaleados los cuerpos de dos mujeres; se cree que este hecho es producto de una retaliación por la agresión que sufrieron dos madereros por parte de miembros de los pueblos Taromenane como rechazo a las constantes incursiones a su territorio en busca de madera.

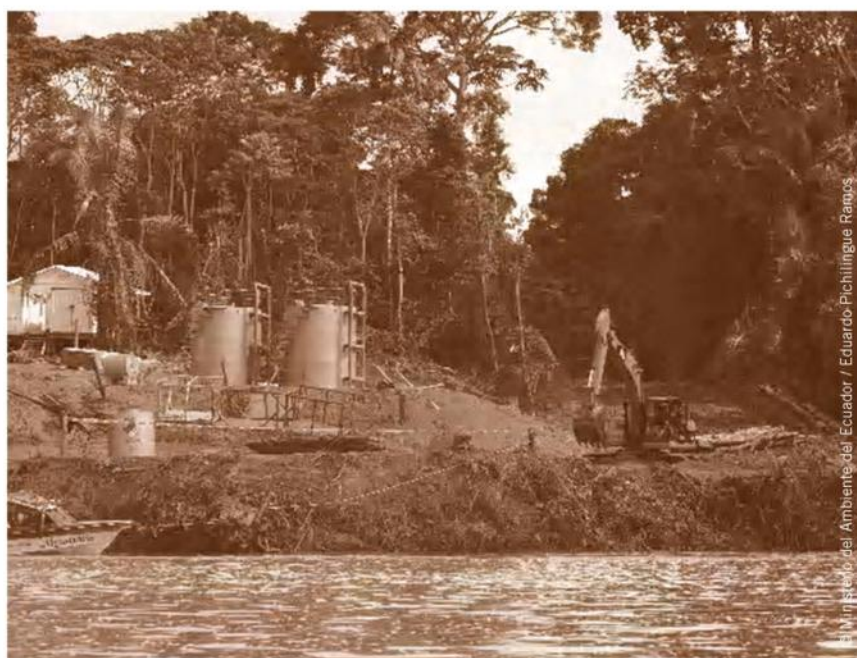
Dentro de la declaratoria de medidas cautelares, se solicita: "*...al Estado Ecuatoriano que adopte medidas efectivas para proteger la vida e integridad personal de los miembros de los pueblos Tagaeri y Taromenane, en especial, adopte las medidas que sean necesarias para proteger el territorio que habitan, incluyendo las acciones requeridas para impedir el ingreso de terceros*". Además se solicitó al gobierno ecuatoriano que informe en el plazo de 10 días sobre la adopción de las medidas cautelares y envíe un informe periódico cada dos meses. Estas medidas se encuentran vigentes hasta que se tome una decisión definitiva sobre la petición planteada.



Posteriormente en el mismo año el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades de los indígenas puso en evidencia la poca presencia del Estado ecuatoriano en la zona, debido a la constante incursión de madereros, empresas petroleras, colonos y turistas ecológicos, instando al Estado a tomar medidas de control y la legislación pertinente en relación a los derechos colectivos y a los pueblos en aislamiento. Donde entre otros puntos se recomendó tomar en cuenta el respeto a la autodeterminación, a la vida, integridad y cultura, a la posesión ancestral y la movilidad de acuerdo a sus patrones culturales de los Pueblos Indígenas en Aislamiento (PIA).

Mediante Decreto Ejecutivo No. 2187, publicado en el Registro Oficial No. 1 de 16 de enero del 2007, el Dr. Alfredo Palacio González, delimita la zona intangible, señalada en el decreto 552, la misma que alcanza 758 051 ha, declarando una zona de amortiguamiento de 10 km. de ancho, ubicadas en las parroquias de Cononaco y Nuevo Rocafuerte, cantón Aguarico en la provincia de Orellana y parroquia Curaray, cantón Pastaza en la provincia de Pastaza. Además se dispuso que el Ministerio de Energía y Minas, Ambiente (hoy Ministerio de Recursos No Renovables), CODENPE (Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador), defina políticas y procedimientos adecuados para evitar o minimizar la influencia de las actividades petroleras que operan en la zona de amortiguamiento, y se respete a los PIA, así como la biodiversidad de la zona.

El 18 de abril del 2007 el gobierno de Rafael Correa emitió la Política Nacional de los Pueblos en situación de Aislamiento. Esta política, entre sus antecedentes legales, recoge la declaratoria de zona intangible, su delimitación, las medidas cautelares otorgadas por la CIDH y las recomendaciones emitidas por el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades de los indígenas, garantizando principios que guían esta política y dando paso a la elaboración de un **“Código de Conducta que observarán las empresas públicas y privadas colindantes a zonas intangibles que realizan actividades hidrocarburíferas en la Región Amazónica”**.



Maquinaria trabajando para la apertura del bloque 31. La actividad petrolera en este bloque, dentro del Yasuni aumentaría las presiones que ya soportan los Pueblos Indígenas Aislados, generando mayor conflictividad de la zona y poniendo en riesgo su supervivencia.

En Septiembre del 2008, se aprueba la nueva Constitución donde, en su Art. 57, se reconoce **“... Los territorios de los pueblos en aislamiento son posesión ancestral e irreductible e intangible y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos...”**.

El Campo Armadillo tiene un área de 3600 hectáreas y reservas probadas de 9 318 354 barriles de crudo, dentro de este bloque se encuentran las siguientes poblaciones: Los Alpes (cooperativa de campesinos colonos), y Armadillo o Dikapare (comunidad Waorani actualmente habitada mayoritariamente por indígenas Achuar).

**Los principios del Código de Conducta que observarán las empresas públicas y privadas colindantes a zonas intangibles que realizan actividades hidrocarburíferas en la Región Amazónica son:**

**Intangibilidad:** Se garantizará la protección de tierras y territorios a favor de los pueblos indígenas en aislamiento y ello comporta el compromiso del Estado de evitar cualquier actividad, del tipo que sea, que pueda poner en peligro su supervivencia.

**Autodeterminación:** Se reconocerá a los pueblos indígenas en aislamiento su derecho a la autodeterminación. Para ello se evitará la implantación agresiva de los modelos asistencialistas que atentan contra su autodeterminación

**Reparación:** Con el fin de proporcionar reparación suficiente, efectiva y rápida, este principio se aplicará en los términos establecidos por la ONU, en dos puntos que se relacionan con el tema: Restitución que busca restablecer la situación previa de la víctima, es decir el pleno ejercicio de sus derechos, así como la satisfacción y garantías de no repetición que implica: cesación de las violaciones, verificación de los hechos y conocimiento público de la verdad, restablecimiento de la dignidad, reputación y derechos de la víctima, reconocimiento público de los hechos y la aceptación de responsabilidades, sanciones judiciales o administrativas a los responsables y la toma de medidas encaminadas a la prevención de nuevas violaciones.

**Pro homine:** En la aplicación de las presentes políticas públicas, en caso de discrepancia entre las normas internas y las internacionales, las autoridades ejecutoras velarán porque se apliquen las normas que proporcionen el mayor grado de protección a los pueblos en aislamiento.

**No contacto:** Deberán ser los pueblos indígenas en aislamiento los que decidan de manera libre y voluntaria el establecimiento de contactos o no con la sociedad.

**Diversidad cultural:** El principio de diversidad cultural es la esencia y la identidad de un Estado. Esta diversidad se refleja en las distintas formas de organización social, económica y política, así como en las diferentes expresiones culturales.

**Precaución:** El principio de precaución se refiere a la toma de decisiones públicas en forma oportuna y adecuada, en situaciones donde la información disponible para ello es insuficiente, donde la información es incompleta o confusa y en situaciones donde precisamente deben ser tomadas a pesar de las dificultades o complejidades.

**Igualdad:** Los pueblos en situación de aislamiento deben gozar de igualdad de derechos, en las mismas condiciones de cualquier otro pueblo, sobre todo cuando su invisibilización histórica, trastoca la cotidianidad de sus relaciones sociales.

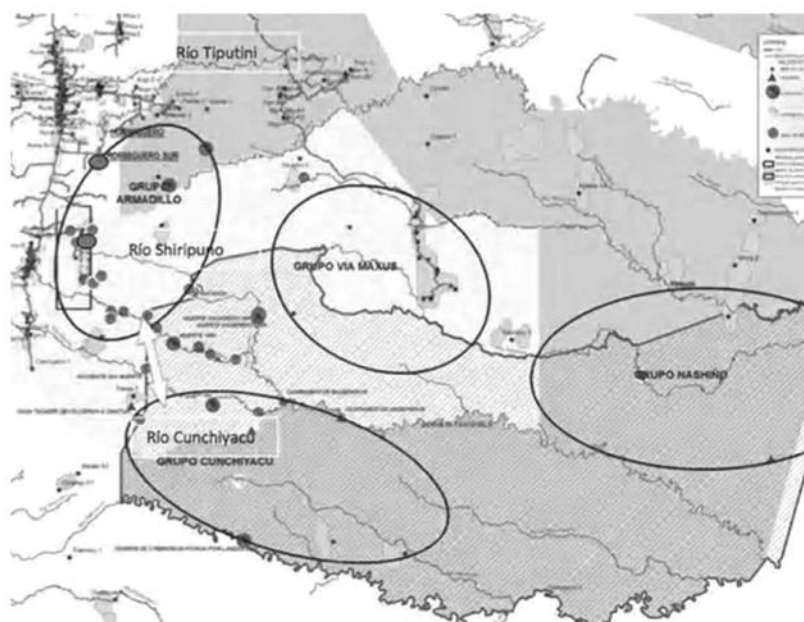
**Respeto a la dignidad humana:** Todo ser humano es un fin en sí mismo y jamás puede ser considerado simplemente como un medio. Esto significa que jamás puede admitirse el exterminio físico o cultural de los pueblos en aislamiento como un medio para obtener los recursos que hacen falta en los procesos de desarrollo en beneficio de los demás ecuatorianos.

Pero mediante Acuerdo Ministerial 030, publicado en el R.O. 550 de 23 de marzo del 2005, se dio la calificación de "campo marginal" a la zona de Armadillo. Y posteriormente en el año 2008, Petroproducción y BGP CO. S.A. suscribieron contratos de exploración de sísmica 3D.

Ante esto en diciembre del 2008, el Ministerio del Ambiente, mediante oficio No. 10537-08-DMA, remitió al Ministerio de Minas y Petróleo (actual Ministerio de Recursos No Renovables) la solicitud para la suspensión de los trabajos por considerarse que esa zona es frágil y vulnerable por tener evidencia de asentamientos de PIA), identificando que en la zona existen cuatro grupos pertenecientes a los pueblos Tagaeri y Taromenane (Maxus, Nashiño, Cunchiyacu y Armadillo), como lo evidencia el mapa que se adjunta; todos superando los límites de la zona intangible.



Mapa - Ubicación de los grupos Tagaeri y Taromenane (Maxus, Nashiño, Cunchiyacu y Armadillo)



Fuente: informe Ejecutivo sobre la situación de los Pueblos Indígenas Aislados en el sector Armadillo - Los Reyes, (Alcarse, PMC, 28 de diciembre del 2003).

Y tomando en cuenta los siguientes hechos:

- Zona de extrema vulnerabilidad pues históricamente en ella se han producido la mayoría de sucesos violentos con los clanes que ocupan dicho territorio.
- Las actividades de prospección sísmica 3D representa la etapa más intrusiva en el proceso de exploración petrolera en relación con los territorios de los pueblos aislados.
- El Plan de Manejo Ambiental de dicha prospección no contempla medidas relacionadas con la presencia de pueblos en aislamiento en el área.
- El 1 de marzo del 2008 el maderero Luis Castellanos fue muerto por lanzas.
- Tres días después una comunidad Waorani tuvo contacto con miembros de dichos pueblos en una casa que se encontraba a pocas horas de camino de la comunidad Armadillo.
- Existen varios indicios de la existencia de un asentamiento Taromenane en el sector comprendido entre los ríos Tihuino, Bataboro y Cuchiyacu (en el sector del campo Gabarón).
- Parte del polígono de prospección sísmica se superpone a la zona de amortiguamiento de la zona intangible Tagaeri y Taromenane, donde están vedadas tales actividades.
- Según antropólogos especialistas, el área mínima necesaria para sostener la vida de un clan Taromenane es de 40 km alrededor de sus viviendas.

A pesar de las evidencias de los asentamientos de pueblos Tagaeri y Taromenane, el 27 de febrero del 2009, se suscribió el contrato de explotación de crudo en el campo marginal Armadillo entre Petroecuador y las empresas Gran Colombia, presentándose posteriormente ante el Ministerio del Ambiente los términos de referencia para su aprobación y solicitando la presencia de militares.



El 27 de enero del 2010, el Coordinador del Plan de Medidas Cautelares, para la protección de los PIA, ratifica su recomendación de no permitir el ingreso de las empresas petroleras al Campo Marginal Armadillo. En esa misma fecha la Coordinadora General, remite el mismo informe, pero excluyendo las recomendaciones antes citadas.

Sin embargo, la Subsecretaría de Calidad Ambiental, el 7 de febrero del 2010, comunicó a las empresas petroleras que los términos de referencia habían sido aprobados y dispone se cree una comisión técnica multidisciplinaria para analizar el informe antes señalado y realizar una auditoría con el fin de garantizar el respeto a los PIA.

Pero el 12 de febrero del 2010, el señor Representante de la Empresa Petrotesting Colombia S.A, dirige Oficio N. PTC –UIO-002-10, indicando que *“El Área del Campo Marginal Armadillo, se encuentra fuera de la zona de Amortiguamiento y de la Zona Intangible, razón por la cual no estaríamos obligados a: citar en el marco legal de la auditoría, la normativa relacionada con la situación de los Pueblos Indígenas en Aislamiento, desarrollar un plan de acción que garantice y contemple las actividades para la protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento, presentar un Plan de Contingencia, previo al ingreso al campo, con el objeto de respetar los principios constitucionales que precautelan la vida y autodeterminación de los Pueblos en Aislamiento”*.

Según el Oficio No. 0261-2009-D-MAE de 11 de junio del 2009, la Ministra del Ambiente se dirige al Ingeniero de BGP y al Gerente de Operaciones de Petrotesting S.A., por el cual recuerda a dichas empresas todas las acciones que se han tomado en relación con la protección de los Pueblos Libres, incluida la suspensión de actividades ordenada por el MAE, respaldada por el Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural, y confirmada por el, entonces, Ministerio de Minas y Petróleo (actual Ministerio de Recursos No Renovables).

En el mismo advirtió que, en virtud de que continúa el hostigamiento a dichos pueblos e incluso a los técnicos del Ministerio del Ambiente de la Estación de Monitoreo de la Zona Intangible Tagaeri – Taromenane, por parte de la comunidad Waorani de Noneno, recuerda a dichas empresas que *“Ecuador ha presentado una política muy clara, que hace de la protección de los Pueblos Indígenas Aislados una prioridad”* y que *“el código penal vigente explícitamente sanciona a quienes realicen, permitan, instiguen actos violentos sobre estos grupos, sus territorios y su cultura, lo que es considerado etnocidio, crimen de lesa humanidad y de carácter imprescriptible”*. Dicho oficio finalmente agregó que tales actos *“de ser confirmados, son una flagrante violación a la Constitución de la República, a los Convenios y Tratados Internacionales relativos a Derechos Humanos, así como leyes alternas que protegen a los Pueblos Indígenas Aislados, lo que no puede ni será aceptado por este Gobierno”*.

En contestación el Gerente de Operaciones de Petrotesting S.A., en Oficio No. PTC-UIO-028-09 de 23 de junio del 2009, después de dar explicaciones sobre el cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes en el Ecuador para operaciones hidrocarburíferas y protección del ambiente en relación con el estricto cumplimiento del contrato suscrito con Petroecuador, cita los Arts. 57 y 407 de la Constitución y concluye textualmente que *“solamente después que la autoridad competente (sic) declare una determinada zona como “intangible”, la actividad extractiva en dicha zona estaría prohibida”*.

Posteriormente, la Ministra del Ambiente se dirige nuevamente al Gerente de Operaciones Petrotesting Colombia S.A., ratificando que la zona donde opera su empresa es territorio de posesión ancestral irreductible e intangible según lo determinado en la Constitución de la República. Y en ese contexto aclara que la Constitución es la norma de mayor jerarquía que ninguna otra puede oponerse a ella, y que el Ministerio del Ambiente es la autoridad nacional en relación a temas de los pueblos indígenas en aislamiento. Finalmente ratifica la posición de que ninguna actividad en campo puede llevarse sin la autorización del Ministerio del Ambiente bajo advertencia de iniciar acciones legales pertinentes por incumplimiento de mandato constitucional y la tipificación de delito de etnocidio.

El 16 de junio del 2011 el Comité de Licitación Hidrocarburífera, del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables abrió el Concurso de Licitación a compañías nacionales y extranjeras, sean privadas o estatales para que participen en la licitación para la exploración y explotación de petróleo, de seis campos marginales entre los cuales se encuentra el Campo Marginal Armadillo.

## Matriz de análisis sobre derechos colectivos de pueblos y nacionalidades del Ecuador

### Pueblos indígenas en aislamiento

Normativa que protege los derechos	(violaciones a los derechos)	¿Qué hacer frente a la violación de los derechos?	Procedimiento bajo derecho (¿Cómo se debió actuar?)
<p>Art. 57.21 segundo inciso de la Constitución: "Los territorios de los pueblos en aislamiento son de posesión ancestral irreducible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley.</p>	<p>Amenaza de violación de derechos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vida;</li> <li>• Integridad;</li> <li>• Igualdad;</li> <li>• Libertad;</li> <li>• Identidad;</li> <li>• Propiedad de sus territorios ancestrales;</li> <li>• Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad;</li> <li>• Conservar y desarrollar sus formas propias de convivencia y organización;</li> <li>• No ser desplazados de sus tierras.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar si los hechos violatorios ocurrieron</li> <li>• Determinar si los hechos afectan, amenazan o vulneran derechos constitucionales e internacionales</li> <li>• Emitir una providencia defensorial de investigación en la cual se disponga: a) Visita in situ al lugar de los hechos; b) Notificar y requerir un informe fundamentado a la autoridad e institución requerida; c) Determinar una fecha para recibir en audiencia a quienes pueden informar sobre el caso.</li> <li>• Si se verifica la amenaza, afectación o vulneración de derechos, resolver: a) Emitiendo un pronunciamiento defensorial, o b) Emitiendo medidas de cumplimiento obligatorio, o c) Elaborar y presentar una acción de garantía jurisdiccional.</li> <li>• Referencia normativa: Constitución Art. 57.21 segundo inciso; Art. 66.1; Art. 66.3; Art. 66.4; Art. 66.29. a); Art. 57.1.4.5.8.9.11; Convenio 169 de la OIT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conocer de oficio el caso.</li> <li>• Emitir una providencia defensorial de investigación.</li> <li>• Disponer una visita in situ al lugar de los hechos.</li> <li>• Disponer a la autoridad e institución requerida informe sobre los hechos ocurridos.</li> <li>• Disponer la realización de una audiencia para escuchar a las partes, así como a terceros interesados.</li> <li>• Requerir informes y peritajes antropológicos a entidades académicas o gubernamentales; Acceder a Jurisprudencia y doctrina internacional sobre derechos territoriales ancestrales.</li> <li>• Emitir un pronunciamiento que puede determinar: a.- Resolución Defensorial, o b.- Disponer medidas de cumplimiento obligatorio, o c.- Elaborar o presentar una acción de garantía constitucional.</li> <li>• Referencia normativa: Constitución Art. 215, 1.2 o 3, Art. 93; LODP Art. 2, Art. 12; Art. 16, Art. 17, Art. 19, Art. 21, Art. 22; LOGICC Arts. 52 al 57.</li> </ul>